A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente **Interpelación urgente al Gobierno para afrontar las deficiencias en el servicio prestado a los ciudadanos por la Administración de la Seguridad Social.**

Madrid, 02 de febrero de 2023

Fdo.: Concepción SAMARRA RUIZ-CLAVIJO

PORTAVOZ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Administración de la Seguridad Social ha sido tradicionalmente una de las ramas de nuestro sistema administrativo mejor valorada por los ciudadanos. Ello obedecía a los mandatos que tanto la Constitución Española de 1978 como la normativa administrativa (destacando la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) imponen: que el servicio prestado por las administraciones sea objetivo, eficiente y ágil.

El cumplimiento de tales principios es indispensable en el funcionamiento de todas las administraciones públicas, pero más aún en la de la Seguridad Social que es el eje vertebrador y de canalización del sistema de bienestar social sobre el que se constituye nuestra nación.

Sin embargo, en los últimos años, observamos cómo este servicio ha visto deteriorada su eficiencia y calidad, menoscabando de manera directa los derechos de los administrados en asuntos trascendentales para sus necesidades, como puede ser, por ejemplo, el reconocimiento de una prestación de viudedad, jubilación o de cuidado de menores. Es inadmisibile.

La dificultad para lograr una cita en una oficina de la Seguridad Social, las demoras en la tramitación de los expedientes administrativos o los errores constantes en su ordinario funcionamiento (el más reciente, el referido al cobro indebido de cantidades a los autónomos) requieren la máxima dedicación y atención por parte del ejecutivo, responsable último de este departamento. Sin embargo, el gobierno mira hacia otro lado.

Los empleados públicos que prestan sus servicios en esta administración, las asociaciones de representación de estos y los sindicatos representativos elevan constantemente sus apelaciones al gobierno, ante su preocupación por este motivo. La profesionalidad habitual y digna de reconocimiento de quienes desempeñan su actividad profesional en la Seguridad Social no es capaz de suplir el abandono de esta administración por parte del ejecutivo.

El propio Defensor del Pueblo, Alto Comisionado de las Cortes Generales en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos ha puesto de manifiesto la realidad que expone esta interpelación. El cuatro de enero de este año, insistió en la necesidad de que “se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía, situación que se aleja mucho de la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad, incompatible con el derecho de buena Administración”. Recalca el Defensor del Pueblo que esto es un “incumplimiento objetivo y directo de la obligación recogida en el artículo 103.1 de la Constitución”.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente Interpelación urgente para que el Gobierno adopte las medidas necesarias para afrontar las deficiencias en el servicio prestado a los ciudadanos por la Administración de la Seguridad Social.